



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-019-2019-00453-01 (O2-22-299)
Accionante: GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE
Accionada: AFP PORVENIR S.A. Y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Procedencia: JUZGADO DIECINUEVE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA n.º 36
Asunto: PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ EN EL RAIS

En Medellín, a los veintiún (21) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-019-2019-00453-01 (O2-22-299), instaurado por GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE en contra de AFP PORVENIR S.A. Y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con el fin de resolver el Recurso de Apelación impetrado por la parte actora y la AFP PORVENIR S.A., así como el grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad pública accionada, respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 17 de agosto de 2022 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

La señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE actuando a través de apoderada judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad AFP PORVENIR S.A. y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en lo sucesivo, MINHACIENDA, a efectos de que se condene a la sociedad AFP PORVENIR S.A. a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del momento que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales mínimos exigidos, junto con los intereses moratorios o la indexación, previa emisión del bono pensional por el tiempo de servicios prestado a favor de TELECOM. De manera subsidiaria, reclama la devolución de saldos.

En respaldo de sus aspiraciones señala que nació el 05 de noviembre de 1957, por lo que ese mismo día y mes de los años 2014 y 2017, alcanzó la edad de 57 y 60 años, respectivamente. Afirma que inició a prestar sus servicios a favor de la extinta TELECOM durante el lapso comprendido entre el 26 de enero de 1979 y el 31 de marzo de 1995, afiliándose al entonces Instituto de Seguros Sociales a partir del 30 de agosto de 1977 y hasta el 12 de enero de 1999, data en la cual se trasladó al RAIS administrado por la AFP PORVENIR S.A.

Prosigue refiriendo que, el 12 de diciembre de 2014, solicitó ante la administradora del RAIS el reconocimiento de la pensión de vejez, petición que fue negada bajo el supuesto de no contar con el capital suficiente para financiar esta prestación económica, así tampoco la densidad de semanas exigidas para ser beneficiaria de la garantía de pensión mínima, por lo que el 20 de abril de 2015, se le hizo el pago de la suma de \$1.273.098,00 a título de devolución de saldos, empero, sin tener en cuenta el tiempo servido a favor de TELECOM. Relata que la AFP PORVENIR S.A. presentó requerimiento para ante la Oficina de Bonos Pensionales de MINHACIENDA, a fin de obtener la redención anticipada del bono pensional por causa de devolución de saldos, no obstante, la cartera ministerial adujo que, a esa calenda, el valor del título era suficiente para financiar una pensión de vejez, derecho que es irrenunciable, negando con ello su redención.

Sostiene entonces la actora como hechos que direccionan la presentación de la acción judicial, el no pago completo de la devolución de saldos, como la negativa en el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de la administradora del RAIS, por motivo de la diferencia en el cálculo del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual – CAI que resulta de las operaciones aritméticas que desarrollaron las codemandadas.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 08 de agosto de 2019 (págs.103 a 104, doc.01, carp.01), y se notificó a las demandadas MINHACIENDA y AFP PORVENIR S.A., el 29 de agosto y el 1° de noviembre de 2019, respectivamente (págs.106 a 109 y 196, doc.01, carp.01), dándose aviso de la existencia del presente proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 18 de febrero de 2020 (págs.299 a 300, doc.01, carp.01) y al Procurador Judicial Delegado en Asuntos Laborales el 09 de agosto de 2019 (pág.105, doc.01, carp.01)

La accionada AFP PORVENIR S.A., discutió a la prosperidad de las pretensiones, admitiendo como ciertos las situaciones fácticas relacionadas con la fecha de nacimiento de la accionante, el tiempo de servicios laborado con TELECOM, el reconocimiento de la devolución de saldos, el cálculo efectuado frente a los recursos en la CAI para financiar la pensión de vejez, y la respuesta brindada a la promotora. En su defensa, propuso como excepciones perentorias, las que individuó como inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda, hecho exclusivo de un tercero, buena fe de la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir S.A., prescripción, compensación, imposibilidad de reconocimiento pensional sin afectar la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la genérica (págs.197 a 296, doc.01, carp.01).

MINHACIENDA también se opuso a la prosperidad de los pedimentos (págs.123 a 170, doc.01, carp.01), aceptando la veracidad de los hechos que hacen referencia al valor del bono pensional a la fecha de redención normal, la solicitud presentada por la accionante y la AFP PORVENIR S.A., y la respuesta brindadas a las mismas, manifestando no constarle o no ser ciertos los demás. Como sustento de su oposición, formuló las excepciones de mérito que nominó como prevalencia del derecho irrenunciable a la pensión de vejez, buena fe y la genérica.

Importa precisar a este respecto que, en el curso del proceso se decretó *ex officio* como prueba la elaboración de un informe por parte de la AFP PROTECCIÓN S.A., tendiente a determinar si la deprecante contaba con el capital suficiente para financiar una prestación pensional por vejez, administradora que atendió el requerimiento del juzgador de instancia indicando que sí contaba con los recursos suficientes para atender el reconocimiento de la prestación económica periódica, medio de convicción que fue sometido al conocimiento y contradicción de sujetos procesales (págs.315 a 317, doc.01, carp.01; docs.03, 10, 17, 20 y 30, carp.01).

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 17 de agosto de 2022 (docs.15 y 17, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en la que determinó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a favor de la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE y a cargo de la AFP PORVENIR S.A., a partir del 05 de noviembre de 2017, por 13 mesadas al año y en cuantía inicial de un SMMLV, no sin antes disponer, por parte de la Oficina de Bonos Pensionales de MINHACIENDA, la emisión, liquidación y pago del bono pensional tipo A, una vez la administradora del RAIS adelante los trámites y solicitudes pertinentes. De igual manera, condenó a la AFP PORVENIR S.A., al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir de la fecha del disfrute de la pensión dispensada.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado luego de explicar los requisitos para la causación de la pensión por vejez en el RAIS, concluyó que ante la diametral disparidad de cálculos para la determinación del capital suficiente para el financiamiento de una pensión en este régimen pensional, razonó que se acogía a lo resuelto por la OBP de MINHACIENDA frente a la conformación de los recursos necesarios en la CAI de la actora a la edad que aquella cumpliera los 60 años de edad, contrario a lo inferido por la AFP PORVENIR S.A., cuyo cálculo se practicó con fórmulas aritméticas impertinentes que arrojaron un capital en la CAI abiertamente inferior. Es así que, reconoce el estatus de pensionada de la promotora a partir del 05 de noviembre de 2017, cuando alcanzó los 60 años de edad, condenando al pago del retroactivo pensional calculado con base a un SMLMV.

Finalmente, en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, accede a los intereses moratorios deprecados a partir del 05 de noviembre de 2017, dada la dilación en la que incurrió la AFP accionada (minuto 57:25 a 01:42:36, doc.17, carp.01).

1.3. Recurso de Apelación

La apoderada de la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación, dirigido a que se revoque la decisión adoptada en la primera instancia, para en su lugar, se fije el mes de noviembre de 2014 como fecha inicial de disfrute de la pensión por vejez en cuantía igual a \$808.804, invocando como argumento basilar el cálculo adosado al expediente por parte de la AFP PROTECCIÓN, cumpliendo la orden del *a quo*, en donde se plasmó que el capital que reposaba en la CAI era suficiente para financiar la pensión de vejez en dichos términos.

En igual sentido la AFP PORVENIR S.A., reclama la revocatoria total del fallo de primer grado, insistiendo que la accionante al momento que solicitó el reconocimiento pensional en el año 2014, así como para el año 2017, cuando esta alcanzó la edad de 60 años, no reunía el capital necesario para el financiamiento de la pensión, por lo que la OBP deberá pagar la suma de \$273.114.507, más el retroactivo y la indexación, para un total de \$326.372.507, no habiendo lugar por tanto, al reconocimiento de los intereses moratorios reclamados, resaltando el abierto desconocimiento de la existencia del bono pensional por el tiempo laborado por la actora en la extinta TELECOM. Así mismo, solicita la indexación de la devolución de saldos por descontar del retroactivo pensional.

1.4. Consulta

Toda vez que la decisión de primera instancia fue desfavorable a los intereses de LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, se analizará íntegramente la decisión en el grado jurisdiccional de consulta a su favor.

1.5. Trámite de Segunda Instancia

Los recursos de apelación se admitieron el 22 de agosto de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 29 de del mismo mes y año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

La vocera judicial de la AFP PORVENIR S.A. (doc.04, carp.02), presentó alegaciones pertinentes afirmando que, luego de efectuado el cálculo de rigor¹, la demandante no cuenta con el capital suficiente para financiar la pensión de mínima de vejez en el RAIS ni la garantía de pensión mínima, por lo que resultaba procedente hacer entrega de la devolución de saldos, para con ello, solicitar se revoque la sentencia de primera instancia. En el mismo sentido y en caso que se confirme las determinaciones objeto de alzada, reclama la indexación de la suma que a título de devolución de saldos se le otorgó a la accionante y cuya deducción del retroactivo fue autorizada por el *a quo*, con el fin de compensar las pérdidas de valor que experimentan las obligaciones a largo plazo, generadas por la devaluación de la moneda o la inflación.

A su turno, la apoderada judicial de la promotora de la litis, reitera los argumentos de hecho y de derecho en los que fundó el disenso, cuestionando así, la fecha del disfrute del derecho pensional y su valor inicial cuantificado por el juez de conocimiento (doc.05, carp.02).

¹ Págs.5 a 8, doc.04, carp.02

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE y la AFP PORVENIR S.A., advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, al igual que se estudiará integralmente la decisión en el grado jurisdiccional de consulta a favor de LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en orden a lo cual se plantea para su estudio el siguiente:

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar de manera principal, si a la demandante, le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en el RAIS, y, de manera subsidiaria, a la devolución de saldos, para lo cual, en su orden, se estudiarán, para el caso del RAIS **i.** las características de la pensión de vejez; **ii.** las fuentes de financiación y el capital necesario que conforman la prestación económica, y; **iii.** la pensión mínima de vejez y la devolución de saldos como prestación subsidiaria de la pensión de vejez.

2.2. Sentido del Fallo

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio** frente al reconocimiento de la pensión mínima de vejez en favor de la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE, a partir del 05 de noviembre de 2017 y en cuantía igual a un SMMLV, **modificándolo** en cuanto a la modalidad de pensión por reconocer, la indexación de la suma por descontar por concepto de devolución de saldos y modulando el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de

los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE nació el 05 de noviembre de 1957 (págs.24, 228, 262 y 266 a 268, doc.01, carp.01), que prestó sus servicios a favor de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – TELECOM durante el lapso comprendido entre el 26 de febrero de 1979 al 31 de marzo de 1995, efectuando cotizaciones a órdenes de CAPRECOM a partir del 01 de abril de 1994 y hasta la finalización del vínculo (págs.25 a 36 y 250 a 261, doc.01, carp.01); que efectuó cotizaciones al RPMPD a través del Instituto de Seguros Sociales entre el 30 de agosto de 1977 al 19 de febrero de 1979 (págs.37 a 40, doc.01, carp.01); que se trasladó del RPMPD al RAIS, representado por la AFP HORIZONTE S.A., hoy AFP PORVENIR S.A., a partir del 09 de marzo de 1995, (págs.217 a 219 doc.01, carp.01), y que cotizó a este último régimen pensional por los periodos de junio de 1998 a noviembre de 2000 (págs.41, 225, 240, 269, 307, 309 a 313 y 339 a 345, doc.01, carp.01).

Adicionalmente, no se discute que la accionante el 12 de diciembre de 2014 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez (págs.42 a 43, 224, 233 a 234, doc.01, carp.01), y, que la AFP PORVENIR S.A. el 20 de abril de 2015, a solicitud de la afiliada, pagó el valor de \$1.273.098,00 a razón de devolución de saldos (págs.44 a 46, 236, 263, 269, 308 y 337, doc.01, carp.01).

2.3.1 Del Sistema General de Seguridad Social: Sistema General de Pensiones.

Lo primero que ha de resaltar la Sala para resolver el escollo que plantea el asunto litigioso es la creación, partir de la promulgación la Ley 100 de 1993, del Sistema de Seguridad Social Integral, incorporando para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, la coexistencia de dos regímenes pensionales denominados en su orden, régimen de prima media con prestación definida –RPMPD- y régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS- (artículo 12, Ley 100

de 1993), los cuales tienen características diametralmente distintas y de naturaleza excluyente. Así, las prestaciones económicas a las que tendrá acceso el afiliado corresponderá a las condiciones preestablecidas en el régimen que se haya seleccionado.

2.3.1.1 Las características de la pensión de vejez en el RAIS: Partiendo de su regulación legal, los regímenes pensionales arriba descritos, a pesar de contar en la actualidad con presupuestos legales comunes, como lo son los requisitos para acceder a las pensiones por los riesgos de invalidez y muerte, no ocurre lo mismo para el reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas del riesgo de vejez, escenario donde se determinan exigencias y mecanismos de financiación disimiles.

De esta manera, recuerda la Sala que el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para el RPMPD, condiciona el reconocimiento de la pensión al cumplimiento de las exigencias de edad y densidad mínima de semanas cotizadas, al tiempo que para el RAIS, en los términos del artículo 64² de la misma normatividad, se precisa que el afiliado debe acreditar en su CAI un capital acumulado que le permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, al cumplimiento de la edad que decida aquel.

Así, el RAIS se define entonces como el *conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados*³, y se encuentra fundado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes al Fondo de Solidaridad, y propende por la competencia entre las diferentes entidades administradoras del sector privado, sector público y sector social solidario, que libremente escojan los afiliados⁴. -Subrayado intencional de la Sala-

2.3.1.2 Las fuentes de financiación y el capital necesario que conforman la pensión de vejez en el RAIS: De acuerdo con lo señalado por el artículo 63⁵ de la Ley 100 de 1993, los

² Ley 100 de 1993, artículo 64. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a este hubiere lugar. Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los términos del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral, legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta y dos (62) años de edad si es hombre.

³ Ley 100 de 1993, artículo 59.

⁴ Ibid..

⁵ Ley 100 de 1993, artículo 63. Cuentas individuales de ahorro pensional. Las cotizaciones obligatorias y voluntarias se abonarán a la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado a prorrata del o los Fondos de Pensiones que este elija o a los que sea asignado de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, de forma que la cuenta estará conformada por las subcuentas que incorporarán lo abonado en cada fondo. Las administradoras deberán enviar a sus afiliados, por lo menos trimestralmente, un extracto que registre las sumas depositadas, sus rendimientos y saldos, así como el monto de las comisiones cobradas y de las primas pagadas, consolidando las subcuentas que los afiliados posean en los diferentes Fondos de Pensiones administrados. Las sumas existentes en las cuentas individuales de ahorro pensional, sólo podrán ser utilizadas para acceder a las pensiones de que trata este título, salvo lo dispuesto en los artículos 85 y 89 de la presente ley. PARÁGRAFO. Para todos los efectos, cuando se haga relación al concepto de cuenta individual o cuenta individual de ahorro pensional, tal referencia corresponderá a la suma de las subcuentas individuales que posea el afiliado en cada uno de los fondos.

recursos provenientes de las cotizaciones, ora obligatorias, ora voluntarias⁶, deberán ser abonadas a la *cuenta individual de ahorro pensional*, además, con la correlativa obligación de la AFP, de *enviar a sus afiliados, por lo menos trimestralmente, un extracto que registre las sumas depositadas, sus rendimientos y saldos, así como el monto de las comisiones cobradas y de las primas pagadas, consolidando las subcuentas que los afiliados posean en los diferentes Fondos de Pensiones administrados*; precisión que resulta necesaria para la correcta comprensión del contenido del artículo 68 del mismo estatuto, que reza *[[las pensiones de vejez se financiarán con los recursos de las cuentas de ahorro pensional, con el valor de los bonos pensionales cuando a ello hubiere lugar, y con el aporte de la Nación en los casos en que se cumplan los requisitos correspondientes para la garantía de pensión mínima,* y sin perjuicio, claro está, del pago del cálculo actuarial o título pensional a cargo de los empleadores que, en época pretérita, y previo a la subrogación de los riesgos de invalidez, vejez y muerte en el Instituto de Seguros Sociales, asumían directamente la obligación prestacional.

Por su parte, los bonos pensionales *constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones*⁷, y por tanto constituyen, a la par de los aportes obligatorios en el SGSSP, los recursos necesarios para el financiamiento de la prestación pensional. Es así, que conforme con los lineamientos consagrados en el SGSS⁸, estos bonos pensionales son instrumentos de deuda pública nacional, que son expedidos a los afiliados para los fines arriba anotados por parte de **a.** la Nación; **b.** las Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional, y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la Caja, Fondo o Entidad emisora, y **c.** por empresas privadas o públicas, o por cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la entidad emisora⁹.

Siendo ello así, para el caso de los afiliados que se trasladen del RPMPD al RAIS y que acrediten a la fecha de dicho traslado haber cotizado al menos 150 semanas¹⁰, tendrán

⁶ **Ley 100 de 1993, artículo 62. Cotizaciones voluntarias.** Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad podrán cotizar, periódica u ocasionalmente, valores superiores a los límites mínimos establecidos como cotización obligatoria, con el fin de incrementar los saldos de sus cuentas individuales de ahorro pensional, para optar por una pensión mayor o un retiro anticipado.

⁷ Ley 100 de 1993, artículo 115.

⁸ **Ley 100 de 1993, artículo 121. Bonos pensionales y cuotas partes a cargo de la Nación.** La Nación expedirá un instrumento de deuda pública nacional denominado bono pensional, de la naturaleza y con las características señaladas en los artículos anteriores, a los afiliados al Sistema General de Pensiones, cuando la responsabilidad corresponda al Instituto de los Seguros Sociales, a la Caja Nacional de Previsión Social, o a cualesquiera otra Caja, Fondo o entidades del sector público sustituido por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, y asumirá el pago de las cuotas partes a cargo de estas entidades. Los bonos a cargo de la Nación se expedirán con relación a los afiliados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley y sobre el valor de la deuda imputable con anterioridad a dicha fecha.

⁹ Ley 100 de 1993, artículo 118.

¹⁰ **Decreto 1299 de 1994, artículo 2, parágrafo 1°.** Los afiliados de que trata el literal a del presente artículo que al momento del traslado hubiesen cotizado menos de ciento cincuenta (150) semanas continuas o discontinuas, no tendrán derecho a bono. Para efecto de contabilizar las semanas previstas en el presente parágrafo se tendrá en cuenta, la suma del tiempo durante el cual el trabajador estuvo cotizando al ISS, a alguna caja o fondo de previsión del sector público,

derecho a la emisión del bono pensional identificado como “Bono tipo A”, el que dicho sea de paso, cuenta con dos modalidades, de acuerdo con la fecha en la que se verifique su primera vinculación laboral. De tal manera que los bonos tipo A de modalidad 1, serán aquellos que se *expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició después del 30 de junio de 1992¹¹*, a contrario sensu, los de modalidad 2, se *expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició antes del 1o. de julio de 1992¹²*.

En línea con lo anterior, el artículo 11 del Decreto 1299 de 1994, previene que *[e]l bono pensional se redimirá cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 1. Cuando el afiliado cumpla la edad que se tomó como base para el cálculo del respectivo bono pensional; 2. Cuando se cause la pensión de invalidez o de sobrevivencia; 3. Cuando haya lugar a la devolución de saldos de conformidad con la Ley 100 de 1993*; normatividad cuya intelección sigue los lineamientos de lo estatuido por los artículos 2.2.16.2.1.1, 2.2.16.1.20 y 2.2.16.1.21 del Decreto 1833 de 2016, que fijan como fecha normal del redención del bono, aquella cuando el beneficiario del bono cumple 62 años de edad si es hombre, o 60 si es mujer; la fecha cuando se alcanzó 500 semanas después de la fecha de corte¹³, “...si a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones el beneficiario del bono tenía 55 o más años de edad si es hombre, o 50 o más si es mujer...”, o bien la fecha en que completaría 1.000 semanas de vinculación laboral válida, suponiendo que trabajara ininterrumpidamente a partir de la fecha de corte.

Al momento que se solicite la devolución de saldos, el prolijo compendio normativo que regula la materia, califica esta redención como anticipada, siempre y cuando “...no hayan sido negociados ni utilizados para adquirir acciones de empresas públicas, el fallecimiento o la declaratoria de invalidez del beneficiario...”¹⁴; distinción que resulta relevante, toda vez que en este último caso y por razones lógicas, la redención anticipada del bono se efectúa previa solicitud de parte del fondo de pensiones, mismo que debe dar cuenta de la causal de redención que le sirve de fundamento.

En síntesis y de cara a los argumentos arriba esbozados, importa señalar por la Sala, sin más elucubraciones, que los recursos para la financiación de la pensión de vejez en el RAIS, provienen de diferentes fuentes así: **i.** los aportes o cotizaciones obligatorias; **ii.** los aportes

prestando servicios como servidor público, vinculado mediante contrato de trabajo a una empresa o empleador del sector privado que tenía a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, o afiliado a una caja o fondo de previsión del sector privado.

¹¹ Decreto 1748 de 1995.

¹² Ibid. Decreto 1299 de 1994, artículo 14.

¹³ **Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.16.1.13. Determinación de la fecha de corte, FC. 1. La fecha de corte, FC, será: a) Para bonos tipo A, la fecha de traslado al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.** b) Para bonos tipo B, la fecha de traslado al ISS.

¹⁴ **Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.16.1.21. Redención anticipada de los Bonos.** Habrá lugar a la redención anticipada de los bonos cuando se dé una de las siguientes circunstancias: 1. Para bonos tipo A que no hayan sido negociados ni utilizados para adquirir acciones de empresas públicas, el fallecimiento o la declaratoria de invalidez del beneficiario, o bien la devolución del saldo en los casos previstos en los artículos 66, 72 y 78 de la Ley 100 de 1993

voluntarios; **iii.** los rendimientos financieros; **iv.** los bonos pensionales, y **v.** la reserva actuarial o título pensional a cargo de los empleadores.

2.3.1.3 La pensión mínima de vejez y la devolución de saldos como prestación subsidiaria de la pensión de vejez en el RAIS: Como se dejó visto en líneas anteriores, la prestación de vejez en este régimen pensional se encuentra sujeta a la conformación, en la CAI, del capital suficiente para financiar una pensión igual al 110% del SMLMV, calculado a la fecha del cumplimiento de la edad que el afiliado escoja.

Seguido a lo anterior, el RAIS contempla dos prestaciones pensionales que, a pesar de coincidir en su cuantía, cual es, la de un SMMLV, difieren en los requisitos para su causación y disfrute, así también en su mecanismo de financiación. El artículo 65 de la Ley 100 de 1993 dispone a su tenor literal que: ***[l]os afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1.150), tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.*** -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

Conforme a la anterior disposición, aflora como resultado de hermenéutica jurídica, por una parte, la pensión mínima de vejez, y de otra, la garantía de pensión mínima. La primera de estas prestaciones económicas, al acudir al artículo 35¹⁵ de ese mismo compendio normativo, plantea la suficiencia de los recursos económicos para la financiación del derecho pensional, a la edad de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, mientras que la última se configura por **a.** la carencia del capital suficiente; **b.** haber alcanzado las edades mínimas antes referidas, y **c.** acreditar un mínimo de 1.150 semanas cotizadas.

A su turno, el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, contempló la figura de la devolución de saldos como un beneficio económico al que tendrán derecho quienes a las edades mínimas no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, suma dineraria que será igual al capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a éste hubiere lugar, cuando así lo soliciten; revelando así, la indiscutible naturaleza subsidiaria de esta prestación, al punto que, con antelación a su reconocimiento y por virtud del condicionamiento en la emisión del bono pensional, deberá verificarse a través de los mecanismos idóneos, *verbi gratia*, una proyección aritmética, si el

¹⁵ Ley 100 de 1993, artículo 35. Pensión mínima de vejez o jubilación. El monto mensual de la pensión mínima de vejez o jubilación no podrá ser inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente.

afiliado al cumplimiento de los 57 años de edad para las mujeres y 62 años para los hombres, o bien a la fecha de redención normal del bono pensional¹⁶, cuenta en la CAI con el saldo de pensión mínima – SPM, o en su defecto, con al menos 1.150 semanas, en aras de privilegiar el reconocimiento pensional sobre este beneficio económico supletorio, en cumplimiento del carácter de irrenunciable y preponderante del primero de estos derechos; pues no puede perderse de vista que, precisamente el objetivo principal del SGSSP es procurar que los afiliados alcancen el reconocimiento de la prestación periódica vitalicia que ampare los riesgos de IVM, mas no la acumulación y libre disposición de un capital que pueda ser retirado cuando así lo disponga su titular.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, frente al carácter residual del beneficio de la devolución de saldos, en sentencias SL6558 de 2017 y SL1142 y SL3470 ambas de 2021, apuntaló:

La devolución de saldos es un beneficio contemplado en la regulación de seguridad social, de carácter subsidiario, que se concede en el régimen de ahorro individual a las personas afiliadas que, al llegar a la edad definida para pensionarse por vejez, no cumplen los requisitos legales mínimos para ello, y por el solo hecho de haber sido parte del sistema y contribuido al mismo, tienen derecho a que le reintegren los saldos acumulados para que no queden totalmente desamparados en la etapa de la vejez.

Puntualmente, en lo que respecta a los mecanismos de pago de la pensión mínima de vejez en el RAIS cuando se cuenta con suficiente capital en la CAI a la fecha de rendición normal del bono pensional, que es precisamente el asunto que ocupa la atención de la Sala en esta oportunidad, como criterio cardinal para acceder o no a la devolución de saldos, se recalca que el artículo 2.2.5.5.1¹⁷ del Decreto 1833 de 2016, señala que ***el Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecerá mediante resolución, y previa consulta con la Superintendencia Financiera de Colombia, las fórmulas para el cálculo del saldo de una cuenta individual suficiente para cubrir vitaliciamente una pensión mínima, consultando los precios de las pólizas de Renta Vitalicia vigentes en el mercado, el cual se denominará Saldo de Pensión Mínima. Igualmente establecerá las fórmulas para la proyección de saldos de que trata el inciso 3o y, en general, los demás cálculos indispensables para la aplicación del presente artículo***; fórmulas de cálculo que se encuentran expuestas en las resoluciones 1875 de 1997, 3099 de 2015 y 3023 de 2017, que

¹⁶ Decreto 1833 de 2016, artículos 2.2.16.2.1.1, 2.2.16.1.20 y 2.2.16.1.21.

¹⁷ Que compiló el artículo 9 del Decreto 832 de 1996, modificado parcialmente por el artículo 2 del Decreto 142 de 2006.

por razones de soporte argumentativo se incorporan a la presente decisión¹⁸, a las que se debe ajustar la nota técnica¹⁹ de cada AFP aprobada por la Superintendencia Financiera.

2.3.2 Del Caso Concreto

Revisado entonces los medios de convicción que fueran adosados en el acontecer judicial, se colige que a la impulsora de juicio le asiste derecho al reconocimiento de un bono pensional tipo A, en la medida en que, además de haber efectuado para el mes de marzo de 1995 un traslado de RPMPD al RAIS, contaba a esa data con más de 150 semanas cotizadas (págs.25 a 40, 217 a 219 y 250 a 261, doc.01, carp.01). Asimismo, probado se tiene que aquella solicitó el reconocimiento de la pensión por vejez en el año 2014, y que finalmente la AFP PORVENIR S.A. el 20 de abril de 2015, le hizo el pago de la suma de \$1.273.098,00 por devolución de saldos (págs.42 a 46, 224, 233 a 234, 236, 263, 269, 308 y 337, doc.01, carp.01).

Del anterior marco fáctico y de lo hasta aquí discurrido, puede afirmar la Sala, que a partir de la solicitud pensional presentada por la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE el 12 de diciembre 2014, al alcanzar los 57 años de edad, la co-demandada AFP PORVENIR S.A., tenía la obligación de verificar en su orden, i. Si los recursos de la CAI a esa fecha o a la que corresponda para la redención normal del bono pensional, resultaban suficientes para financiar la pensión mínima de vejez; y, a falta de estos; ii. Si acreditó la cotización de al menos 1.150 semanas de cotización, todo ello, **previo a hacer efectiva la devolución de saldos.**

En este horizonte, asoma meridiano que la AFP convidada a juicio, incumplió este deber legal, toda vez que no allegó a la actuación judicial prueba de los cálculos del SPM –Saldo de Pensión Mínima- a los que recurrió, **incluyendo la liquidación del bono pensional cuantificado a la fecha de redención normal**, y concluir, en el caso de la actora, la insuficiencia de este saldo mínimo. Aunado a lo anterior, tampoco se probó que las resultas de esta operación aritmética fueran puestas en conocimiento de la afiliada para así aceptar, la prestación subsidiaria de devolución de saldos; destacándose que, solo se demostró haber efectuado los cálculos para el mes de septiembre de 2018 (págs.83, 243 a 245 y 284 a 288, doc.01, carp.01), esto es, cuando ya había transcurrido poco más de tres años de la solicitud de reconocimiento pensional y en abierta infracción del deber consignado en el artículo 60 de la Ley 100 de 1993, que impone a las administradoras la *obligación expresa de informar a los afiliados sus derechos y obligaciones de manera tal que les permitan la adopción de decisiones informadas.*

¹⁸ Ver anexos.

¹⁹ Parágrafo 2, artículo 1°, Resolución 3099 de 2015, modificado por la Resolución 3023 de 2017. Circular Externa 013 de 2012, Superintendencia Financiera de Colombia.

Por su parte, no soslaya esta Sala de Decisión, que la Oficina de Bonos Pensionales de MINHACIENDA, reiteradamente se ha negado a redimir anticipadamente el bono pensional al que tiene derecho la promotora señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE, bajo el presupuesto que, de acuerdo con el cálculo efectuado, la afiliada al 05 de noviembre de 2017, fecha de redención normal del bono pensional (60 años de edad), reúne el capital necesario para financiar la pensión mínima de vejez, considerando que *para el momento en que se solicitó la pensión de vejez ante la AFP PORVENIR por parte de la demandante (12 de Diciembre de 2014) **y conforme a los factores actuariales consagrados en la Resolución 1875 del 15 de Septiembre de 1999 (vigente al año 2014)**, se pudo constatar que, para el momento en que se causara la redención normal del bono pensional de la señora MORALES ALZATE (05 de Noviembre de 2017), la ahora demandante requería de un capital para Pensión Mínima de \$178.198.410.02 y, para una pensión mínima en la modalidad de RETIRO PROGRAMADO, debería contar con un capital de \$185.326.346.42, condiciones que, como se demostrará más adelante, se cumplían a cabalidad en el presente asunto, siendo ésta la razón por la cual esta oficina ha considerado que la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE NO TIENE DERECHO A LA DEVOLUCION DE SALDOS POR VEJEZ, dado que, para la fecha de redención normal del bono pensional contaba con el capital suficiente para acceder a una Pensión de Vejez*, anexando las operaciones y valores que explican esta conclusión (págs.144 a 155, doc.01, carp.01). -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

Conforme a lo antes expuesto, era deber de la codemandada AFP PORVENIR S.A., conforme con lo reglado en artículo 167 del CGP, persuadir al juzgador de la idoneidad y pertinencia de la proyección que realizó para negar el derecho pensional de la suplicante, y con ello derruir los pilares que sostienen las operaciones matemáticas que, en torno al SPM, fueron efectuadas por la OBP de MINHACIENDA con base el artículo 81 de la Ley 100 de 1993, pues recuérdese, que la cartera ministerial en aplicación de la Resolución 1875 de 1999, calculó el derecho pensional en la modalidad de retiro programado, con la conclusión de suficiencia de capital en la CAI a la que también arribó otra administradora del RAIS, como lo es, la AFP PROTECCIÓN S.A. (docs.20 y 30, carp.01).

Por ello, el juicio de admisibilidad y aun el grado de convicción de la prueba en materia de cálculos pensionales en el RAIS, se encuentra determinada por la fiabilidad del ejercicio intelectual del experto, a la vez de la verificación del cumplimiento de las fórmulas legalmente establecidas y un nexo coherente y suficiente entre la valoración y la conclusión a la que llegó aquel; aspectos éstos que se muestran robustos y consistentes en la tesis de MINHACIENDA antes trasunta.

Ello, en atención a que ningún elemento de prueba tuvo la entidad suficiente para colegir que los valores que allí fueron enunciados no se compadecen con los lineamientos contenidos en las resoluciones expedidas sobre la materia, en tanto en cuanto, la AFP PORVENIR no justificó con la exhaustividad, precisión y rigurosidad que se reclama en los procesos de esta naturaleza, el error subyacente en el cálculo de la Oficina de Bonos Pensionales – OBP, así tampoco, identificó la resolución contentiva de la fórmula que utilizó para establecer el saldo de una pensión de salario mínimo legal mensual vigente, ni la nota técnica aprobada por la Superintendencia Financiera, para de esta forma, no solo someter a escrutinio las operaciones aritméticas que respaldan la tesis de su defensa, sino también, para la correcta verificación de las bases técnicas que amparan debidamente la estructura financiera de la modalidad pensional del retiro programado calculado, quedándose solo en el escenario de la simple especulación y de apreciaciones acomodaticias las sumas dinerarias a las que se hizo alusión la parte apelante en el recurso de alzada.

Así también, las anteriores imprecisiones se replican, con menor intensidad claro está, en la proyección realizada por la AFP PROTECCION S.A., pues a pesar de coincidir con la Nación en la suficiencia de capital en la CAI para ser la demandante beneficiaria de la pensión mínima de vejez y citar las resoluciones y fórmulas tenidas en cuenta en el cálculo, no razonó ni fundamentó el motivo por el cual se apartaba de la tasa porcentual tenida en cuenta por la OBP de MINHACIENDA, ni en la diferencia evidente entre el valor del bono pensional que tasó aquella entidad y la que se entregó en el informe al juzgador de instancia, lo que explica que el valor de la mesada haya resultado ligeramente superior al salario mínimo legal mensual vigente, y no permite acoger la tesis del disenso de la parte impulsora del pleito para variar la fecha de causación de la prestación ni la cuantía de la misma, para forzar a la Nación a reconocer por concepto de bono pensional, un valor superior al efectivamente liquidado por la entidad competente²⁰.

Bajo este presupuesto irrefutable, no merece reproche alguno el ejercicio conclusivo vertido en la decisión hoy revisada para educir la procedencia del reconocimiento a la pensión por vejez, pues en la misma se plasmó de manera racional, con arreglo a lo autorizado por los artículos 60 y 61 del CPTSS, los motivos por los que se desestimó el cálculo de la AFP PORVENIR S.A. y se privilegió el de la OBP de MINHACIENDA, aclarando aquí y ahora, que en ningún escenario, se estiman infalibles las determinaciones que tome esta cartera ministerial, en tanto

²⁰ Decreto 4712 de 2008, artículo 11. Oficina de Bonos Pensionales. Son funciones de la Oficina de Bonos Pensionales, las siguientes:

1. Reconocer, liquidar, emitir, expedir, pagar y anular los bonos pensionales y cuotas partes de bonos a cargo de la Nación.

(...)

3. Desempeñarse como autoridad técnica en materia de bonos pensionales, y actuar como mediador entre los emisores, contribuyentes y entidades administradoras de bonos pensionales cuando quiera que se presenten discusiones entre estos en razón del valor del bono o el método utilizado para su cálculo de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19 del Decreto 1513 de 1998 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

en cuanto, ni la disposición normativa que regula la devolución de saldos ni las funciones atribuidas a esta entidad, sujeta el reconocimiento de este beneficio subsidiario a la aprobación por parte de la Nación, empero, ciertamente, “...el rol del Estado a través del Ministerio de Hacienda en el sistema general de pensiones no solo es cumplir las normas legales – artículos 66 y 117 de la Ley 100 de 1993- sino también el de proteger o garantizar a los ciudadanos el reconocimiento de eventuales derechos pensionales futuros...”²¹; y en este caso concreto no se demostraron errores protuberantes en el cálculo, o bien, razones atendibles para apartarse de lo allí concluido.

Para abundar en razones, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-1142 de 2021, al resolver un caso de similares contornos, adoctrinó que:

En el asunto que se analiza, el Tribunal cometió la transgresión jurídica que le endilga la censura, pues no advirtió que si en la devolución de saldos se incluía un bono pensional, antes que confirmar la orden de su redención anticipada a fin de reintegrar su valor junto con el capital ahorrado en la cuenta individual de la actora, tenía la obligación de verificar si tal redención era procedente en los términos legales indicados y, concretamente, se reitera, si para la fecha de su redención normal se reunía o no el capital suficiente para financiar la pensión de vejez, así fuere de un salario mínimo legal.

Nótese que, sobre este particular, la Corte ya ha precisado que el condicionamiento contemplado en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, relativo a que el bono pensional puede incluirse en la devolución de saldos si a éste hubiere lugar, está dirigido precisamente a evaluar sus posibilidades de emisión, expedición, redención y pago, pues solo así es posible determinar legalmente su procedencia, bien para financiar las potenciales pensiones o, en subsidio, las prestaciones alternativas, como precisamente es la referida devolución de saldos (CSJ SL451-2013). En otros términos, no es viable acceder a devolver el valor de un bono pensional si aún no se ha determinado la viabilidad jurídica de su redención y pago, y la forma en que ello debe proceder. En la sentencia aludida la Sala puntualizó:

(...) cuando la norma condiciona la inclusión del bono pensional dentro de la devolución de saldos, a través de la expresión “si a éste hubiere lugar”, no hace cosa diferente a preveer que su cómputo debe partir de la base de que hubiera sido posible emitirlo, para financiar una eventual pensión de vejez (...).

²¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-1142 de 2021.

Por lo mismo, la devolución de saldos debe ser pensada y entendida como una prestación alternativa a las pensiones, que busca compensar los intentos fallidos de pensión y cumplir de otra manera con los fines de la seguridad social, por lo que debe comprender todos aquellos factores derivados del trabajo y del ahorro del afiliado, que buscaban soportar financieramente su jubilación, como el bono pensional.

Así las cosas, le asiste razón a la censura, pues el juez plural, además de no indagar si el bono pensional podría eventualmente reunir los requisitos para ser redimido de forma normal, también pasó por alto que esto potencialmente incidiría en un derecho a la pensión de vejez que, en consecuencia, impide acceder a la pretensión subsidiaria de devolución de saldos, tal y como se explicó.

Lo anterior es relevante pues los recursos que un afiliado tiene en una cuenta de ahorro en el régimen de ahorro individual con solidaridad están diseñados idealmente para que aquel enfrente las contingencias de la seguridad social como la vejez, **de modo que es necesario que la decisión que permita el acceso a la devolución de saldos determine detalladamente la imposibilidad definitiva de acceder a una pensión de vejez, que como se explicó, es lo que de forma prevalente busca garantizar el sistema.**

(...) Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que la devolución de saldos solo es factible cuando de forma definitiva se descarte la posibilidad de acceder al derecho a la pensión de vejez. Precisamente, en la sentencia T-445A-2015 dicha Corporación señaló:

Se desconocería la finalidad del sistema pensional al acceder a la solicitud de la accionante, en consideración a su especial situación económica y al haber cumplido los requisitos para acceder a la devolución de saldos. El diseño normativo del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, se encuentra dirigido a amparar contingencias como la vejez, de tal manera que solo quienes no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, o acumulado el capital necesario para financiar la pensión, son quienes definitivamente pueden acceder al reconocimiento de la devolución de saldos, prestación que tiene un carácter subsidiario.

3.28. Adicional a lo anterior, conviene recordar que la redención del bono pensional constituye el momento a partir del cual la obligación se hace exigible. De conformidad con el Decreto Ley 1299 de 1994, artículo 11, una de esas circunstancias es cuando el afiliado cumpla la edad que se tomó como base para el respectivo cálculo del bono

pensional, y es esta fecha la que, en principio, debe tenerse en cuenta al efecto y solo de manera excepcional acudir a la redención anticipada del bono, caso de la invalidez, la muerte, o el derecho a la devolución de saldos. Siendo esta la finalidad del sistema y, atendiendo a que la devolución de saldos es una prestación subsidiaria, la redención anticipada del bono pensional solo debe ocurrir en caso de que a la fecha normal de redención no se pueda obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, motivo por el cual considera la Sala que no se encuentra vulnerado el derecho al mínimo vital, ni a la seguridad social de la accionante, pues se insiste para el momento de la redención ordinaria del bono y sin necesidad de que se efectúen nuevas cotizaciones, la accionante contará con el capital suficiente para la pensión de vejez, que constituye la prestación principal del sistema. -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

Con todo lo expuesto, la Sala estima necesario, modificar la decisión revisada para precisar que la modalidad pensional del RAIS a la que tiene derecho la actora corresponde a la de retiro programado. Empero, lo anterior no es óbice para advertir a la AFP PORVENIR S.A. y a la afiliada GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE, que en caso de ser necesario, la modalidad de pensión deberá ser modificada a la de renta vitalicia como resultado del control de saldos, con la obligada contratación, por intermedio de la AFP pensionante, del seguro respectivo para garantizar el pago del derecho pensional en cuantía no inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, de cara al trámite y requisitos contenidos en el artículo 2.2.6.3.1²² del Decreto 1833 de 2016.

2.3.3. Los intereses de mora

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago, intereses que: (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala

²² Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.6.3.1. Control de saldos en el pago de pensiones bajo la modalidad retiro programado. En los términos del artículo 81 de la Ley 100 de 1993, las AFP que ofrezcan el pago de pensiones bajo la modalidad Retiro Programado, deben controlar permanentemente que el saldo de la cuenta de ahorro individual, mientras el afiliado disfruta de una pensión pagada bajo tal modalidad, no sea inferior a la suma necesaria para adquirir una póliza de Renta Vitalicia. En desarrollo de tal previsión, con sujeción al Decreto 719 de 1994, y normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, el afiliado informará por escrito a la AFP en el momento de iniciar el Retiro Programado, la aseguradora con la cual ésta deberá contratar la Renta Vitalicia en caso de que el saldo no sea suficiente para continuar recibiendo su pensión bajo la modalidad Retiro Programado, sin perjuicio de que su decisión pueda ser modificada posteriormente. En todo caso, la administradora contratará con la última aseguradora informada por el afiliado. La AFP deberá informar al pensionado con por lo menos cinco (5) días de anterioridad a la adquisición de la póliza, sobre la necesidad de continuar recibiendo su pensión bajo la modalidad Renta Vitalicia, así como las nuevas condiciones de pago de la misma. En todo caso deberá incorporarse en el contrato de retiro programado o en el reglamento respectivo, una cláusula que aluda al artículo 81 de la Ley 100 de 1993, el cual especifica que el saldo de la cuenta individual, mientras el afiliado disfruta de una pensión bajo esta modalidad, no podrá ser inferior al capital requerido para financiar al afiliado y sus beneficiarios una Renta Vitalicia de un salario mínimo legal mensual vigente, indicando que por tal razón, en el momento en que el saldo deje de ser suficiente, deberá adquirirse una póliza de Renta Vitalicia. PARÁGRAFO PRIMERO. Si el saldo final de la cuenta individual fuese inferior a la suma necesaria para adquirir una Renta Vitalicia y la AFP no tomó en su oportunidad las medidas necesarias para evitar esta situación, la suma que haga falta será a cargo de la AFP, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar por el incumplimiento a un deber legal. PARÁGRAFO SEGUNDO. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio de resolución, y previa consulta con la Superintendencia Bancaria, fijará las fórmulas matemáticas a emplear por las AFP para establecer si un afiliado puede contratar un Retiro Programado de acuerdo con los parámetros empleados para calcular el Saldo de Pensión Mínima que se describen en el artículo 90 del presente decreto.

fe no es relevante para su interposición, (ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran su imposición, siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de nuevas reglas jurisprudenciales (CSJ SL1019 del 03-03-2021, Radicado 86195).

Pese a lo dicho, la jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que el reconocimiento de dichos intereses no opera de forma automática, sino que se deben estudiar las causas que llevaron a la entidad para negar el reconocimiento de la prestación, y en esa dirección destacó que no resultaba razonable imponer el pago de intereses moratorios cuando la conducta de la administradora estuvo guiada por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaba regía al derecho en controversia, y en tal sentido, “... *no son viables cuando el reconocimiento de la prestación obedece a la creación del criterio jurisprudencial*” (CSJ SL-787 del 06-11-2013, Radicado 43.602; SL-8644 del 03-09-2014, Radicado 50529; SL-2941 del 09-03-2016, Radicado 52529; SL-1547 del 18-04-2018, Radicado 67168; SL-4599 del 16-10-2019, Radicado 78109; SL-2414 del 01-07-2020, Radicado 82233).

Desde ese horizonte, la Sala avizora que la AFP PORVENIR S.A. se abstuvo de reconocer la pensión de vejez con fundamento en los resultados del cálculo del SPM, apoyado en las disposiciones normativas que rigen la materia, como lo son las fórmulas y la nota técnica, y que a su juicio no permiten acreditar la conformación del capital necesario para la pensión mínima, hipótesis que no se adecúa a los especiales escenarios a los que se hizo alusión en el punto inmediatamente anterior, resultando por tanto procedente los intereses moratorios, los que sin embargo, se ajustarán, para ser concedidos solo a partir del 6 de marzo de 2018, data en la cual se venció el término de 4 meses con el que contaba la administradora para el reconocimiento pensional²³.

Finalmente, se impone también la modificación de la decisión revisada, para autorizar a la AFP PORVENIR S.A., a descontar del valor del retroactivo pensional, la suma pagada por concepto de devolución de saldos debidamente indexada, al resultar dicho valor afectado por la devaluación de la moneda, por razón de que vivimos bajo una economía notoriamente inflacionaria, comportando la indexación el remedio efectivo para morigerar el impacto negativo de la depreciación.

²³ Decreto 656 de 1994. Ley 797 de 2003.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, no hay lugar a condena en costas en vista de su no causación, dada las resultados de los recursos de apelación elevados por las partes.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR los numerales PRIMERO, SEGUNDO y QUINTO de la sentencia proferida el 17 de agosto de 2022 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE, en contra de la AFP PORVENIR S.A. y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, los cuales quedarán así:

PRIMERO: DECLARAR que a la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE, identificada con C.C. 32.312.902, le asiste derecho a la pensión mínima de vejez consagrada en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, la cual estará a cargo de la AFP PORVENIR S.A, bajo la modalidad de retiro programado a partir del 05 de noviembre de 2017, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente. ADVERTIR a la AFP PORVENIR S.A. y a la afiliada GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE, que en caso de ser necesario, esta última deberá contratar, por intermedio de la AFP pensionante, el seguro de renta vitalicia para el control de saldos y garantizar el pago del derecho pensional en cuantía no inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, de cara al trámite y requisitos contenidos en el artículo 2.2.6.3.1²⁴ del Decreto 1833 de 2016.

²⁴ Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.6.3.1. Control de saldos en el pago de pensiones bajo la modalidad retiro programado. En los términos del artículo 81 de la Ley 100 de 1993, las AFP que ofrezcan el pago de pensiones bajo la modalidad Retiro Programado, deben controlar permanentemente que el saldo de la cuenta de ahorro individual, mientras el afiliado disfruta de una pensión pagada bajo tal modalidad, no sea inferior a la suma necesaria para adquirir una póliza de Renta Vitalicia. En desarrollo de tal previsión, con sujeción al Decreto 719 de 1994, y normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, el afiliado informará por escrito a la AFP en el momento de iniciar el Retiro Programado, la aseguradora con la cual ésta deberá contratar la Renta Vitalicia en caso de que el saldo no sea suficiente para continuar recibiendo su pensión bajo la modalidad Retiro Programado, sin perjuicio de que su decisión pueda ser modificada posteriormente. En todo caso, la administradora contratará con la última aseguradora informada por el afiliado. La AFP deberá informar al pensionado con por lo menos cinco (5) días de anterioridad a la adquisición de la póliza, sobre la necesidad de continuar recibiendo su pensión bajo la modalidad Renta Vitalicia, así como las nuevas condiciones de pago de la misma. En todo caso deberá incorporarse en el contrato de retiro programado o en el reglamento respectivo, una cláusula que aluda al artículo 81 de la Ley 100 de 1993, el cual especifica que el saldo de la cuenta individual, mientras el afiliado disfruta de una pensión bajo esta modalidad, no podrá ser inferior al capital requerido para financiar al afiliado y sus beneficiarios una Renta Vitalicia de un salario mínimo legal mensual vigente, indicando que por tal razón, en el momento en que el saldo deje de ser suficiente, deberá adquirirse una póliza de Renta Vitalicia. PARÁGRAFO PRIMERO. Si el saldo final de la cuenta individual fuese inferior a la suma necesaria para adquirir una Renta Vitalicia y la AFP no tomó en su oportunidad las medidas necesarias para evitar esta situación, la suma que haga falta será a cargo de la AFP, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar por el incumplimiento a un deber legal. PARÁGRAFO SEGUNDO. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio de resolución, y previa consulta con la Superintendencia Bancaria, fijará las fórmulas matemáticas a emplear por las AFP para establecer si un afiliado puede contratar un Retiro Programado de acuerdo con los parámetros empleados para calcular el Saldo de Pensión Mínima que se describen en el artículo 90 del presente decreto.

SEGUNDO: *CONDENAR a la AFP PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE la pensión mínima de vejez, cuantificándose el retroactivo pensional liquidado entre el 5 de noviembre de 2017 y el 31 de julio de 2022, en la suma de \$53.258.720, sobre 13 mesadas pensionales por año completo. Se resalta que sobre este valor deberá efectuarse los descuentos con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud. AUTORIZAR a la AFP PORVENIR S.A. a descontar del retroactivo liquidado, la suma de \$1.273.098 debidamente indexada, correspondiente al valor reconocido por devolución de saldos a la demandante.*

QUINTO: *CONDENAR a la AFP PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a favor de la señora GLADYS DEL SOCORRO MORALES ALZATE, los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 6 de marzo de 2018 y hasta el momento en que se verifique el pago de la obligación pensional.*


SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de alzada.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

